

¿Es capaz la costumbre de asimilar información?
EDMUNDO BERUMEN

En crisis o fuera de ella la información de indicadores prioritarios como la tasa de desocupación abierta o el índice nacional de precios al consumidor, son esenciales para medir el resultado de acciones recientes de las distintas instancias de gobierno, así como para identificar aquellas áreas en las que se quiere incidir a futuro con nuevas políticas.

Instituciones tan prestigiadas técnicamente como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y el Banco de México (BM) son las que generan la mayoría de estos indicadores. No hay mejor infraestructura o solidez técnica para hacerlo mejor fuera de ellas. Sin embargo, ante la crisis, vale preguntarse si precisamente su expertise se está aprovechando para medir lo esencial de manera más eficiente y acorde a la austeridad que hoy día todos debemos observar y promover.

Reconociendo la enorme distancia y escala respectiva, la misma pregunta es válida para quienes desde la iniciativa privada ofrecemos servicios similares.

El INEGI

La Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) que levanta el INEGI cubre 39 grandes áreas urbanas, dando resultados individuales para cada una de ellas. Para ello, se visitan trimestralmente alrededor de 90 mil viviendas y se recaba información de empleo de cada una de las personas de 12 años o mayores (alrededor de 315 mil personas). La muestra está distribuida aleatoriamente en las 13 semanas del trimestre, lo que permite cortes mensuales de estimación.

Surgen, entonces, varias preguntas. ¿Podrían estimarse los parámetros prioritarios de empleo con menos muestras por ciudad? ¿Podrían las instancias de gobierno tomar el mismo tipo de decisiones si los indicadores de empleo no fueran desglosados para todas las ciudades? ¿Serían suficientes indicadores trimestrales?

Desde ya se intuyen algunos de los argumentos en contra de modificar la situación actual: "Se perdería precisión y confianza en las estimaciones." "Se rompería la serie histórica." "No habría datos para varias ciudades importantes." "Se perdería la capacidad para profundizar en el análisis." "No habría datos mensuales para tomar decisiones." Nuestro punto es que precisamente el INEGI es quien puede intentar una respuesta inteligente a éstas y a otras interrogantes relevantes.

Tomemos el tema de tamaños de muestra. ¿Es necesario entrevistar alrededor de dos mil 100 viviendas o más por ciudad y por trimestre? Un simple análisis de los errores de muestreo podría evidenciar de que no hay pérdida significativa en la confianza y precisión de las estimaciones prioritarias si tan sólo se entrevistaran, digamos mil viviendas por trimestre, con el consecuente ahorro, pues su principal componente son los costos del campo.

Para los tabulados complejos que requieren más casos, simplemente se "acumula" muestra a lo largo de un trimestre-semestre-año para producirlo. ¿Y si se reduce la muestra aún más al grado que ya no se pueden producir estimaciones separadas de cada ciudad, excepto quizá para las tres áreas metropolitanas más grandes? No importa. Que se conozca: la instrumentación de políticas de empleo para la población urbana de nuestro país no se hace de manera diferencial para cada una de las 39 grandes ciudades. Las autoridades que realmente toman decisiones a ese nivel, que aporten los recursos adicionales necesarios. Si no, que esperen a que se "acumule" muestra para tener "un indicador" local.

Siguiendo esta línea de argumentación se podría llegar, entonces, a la conclusión de que sería suficiente una muestra de alrededor de seis mil viviendas al trimestre, para obtener las estimaciones prioritarias para el "México urbano" como un todo cada mes, y estimaciones separadas para cada una de las tres áreas metropolitanas más grandes al final de cada trimestre. El contraste contra las 90 mil que se levantan actualmente lo dice todo en cuanto a potencial de ahorro.

Veamos el tema de periodicidad. ¿Es necesario conocer mensualmente los indicadores y tasas de empleo-desempleo, o sería suficiente de manera trimestral? Pregunta más sobresaliente aún ante la actual coyuntura que vive el país. Más allá de los análisis que los expertos pueden realizar con los datos mensuales, ¿qué con los que "instrumentan las políticas de empleo"? Después de todo, "ellos" son los usuarios prioritarios de la encuesta. ¿Reaccionan "ellos" ante la evidencia mensual del cúmulo de datos que ahora reciben, "instrumentando" ajustes o nuevas políticas de empleo cada mes? Si no hay esa capacidad administrativa de reacción, ¿en qué afecta que el flujo fuera cada trimestre? La muestra se podría reducir aún más con el consecuente ahorro adicional.

En tanto, las investigaciones a profundidad se pueden realizar con la serie ya disponible. Si en algo vamos a la zaga, no es en la producción de información, es en el aprovechamiento cabal de las estadísticas ya disponibles.

Alguien podría decir, "sí, todo lo anterior puede ser válido para los indicadores basados en tasas o razones, pero no para estimaciones confiables y precisas de los totales". Tiene razón. Pero la tiene aún ahora, con los tamaños de muestra actuales. Las variaciones que se observan en buena medida son las esperadas variabilidades debido a los "errores de muestreo", y no al cambio real en estos números.

La ilustración se basó en la ENEU, de manera gruesa, sin información precisa ni al detalle. El INEGI podría fácilmente llevar a cabo un ejercicio minucioso que sustente recomendaciones prácticas, técnicamente defendibles, y políticamente viables.

Pero ahí están otras encuestas en hogares y en establecimientos económicos que resisten a un análisis similar. Y ya visto el conjunto, ¿por qué no aprovechar al mismo personal de campo para levantar distintas encuestas en lugar de tener distintos encuestadores visitando a las mismas unidades para obtener información para distintas encuestas?

¿Y qué de los "nuevos" proyectos? Por ejemplo, ¿es realmente indispensable un "conteo intercensal" en 1995, cuando se cuenta con el censo de 1990, y la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica de 1992 (ENADID) que proporciona estimaciones a nivel estatal? Su costo es altísimo. Si los ajustes presupuestales ya causaron su baja, vale. Sin aún no, la pregunta sigue siendo válida.

Planteados los interrogantes y sugeridas algunas avenidas de acción, es obligado reconocer que el INEGI no ha estado cruzado de brazos. Ya desde el año pasado viene embarcado en un ambicioso programa de "calidad total". Una vez más se corrobora que su reconocido prestigio no es gratuito. Ya conoceremos resultados.

El Banco de México

En abril de 1982 el Banco de México (BM) hizo la "transferencia oficial" de los cálculos de las Cuentas Nacionales al INEGI. Sin embargo, se quedó con la infraestructura indispensable para continuar elaborando mensualmente el índice de volumen físico de la producción para actividades industriales. Pronto lo amplió para llegar nuevamente a divulgar una "medida" del producto nacional que inició con corte trimestral en 1986, con base en 1970, complementando la información con índices de oferta-demanda. Un año después, el INEGI inicia la divulgación del PBI a nivel trimestral, con base en 1980, y a partir de 1993 agrega indicadores de oferta demanda y otros de destino al consumo intermedio.

En la historia más reciente, y ligado a la "autonomía" del BM, se define que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) lo deje de hacer el BM para transferirlo al INEGI. ¿Qué a pasado? Que en tan sólo unas semanas nos enteramos que el BM "actualizó" la canasta básica de bienes y productos, con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 1989 (ENIGH). Este sólo acto aparentaría una intención por parte del BM de continuar elaborando el IPC, pues si fuera a pasar al INEGI, seguramente éste hubiera realizado la "actualización" si no con la ENIGH-1994 seguramente ya disponible internamente, al menos con la ENIGH-1992 ampliamente difundida.

Aquí el tema no es de tamaños de muestra y periodicidad de los indicadores, es el de la duplicidad de esfuerzos y no uso de economías de escala, a sabiendas de las diferencias en "bases" y unidades, todas solubles. La duplicidad y discrepancias reales o aparentes fomentan confusiones y restan credibilidad a ambas instituciones.

Por último, está la cuestión de la responsabilidad del BM en la definición de políticas económicas cruciales. Por esta razón, ¿debe continuar la medición de algunos de los indicadores que sirven para evaluar su desempeño? El viejo tema de ser juez y parte. Lo más saludable es que las calculara el INEGI, y que finalmente le concedan su tan justificada autonomía, pues si no, la crítica será igualmente válida dada su dependencia de la SHCP.

La iniciativa privada

¿Y quienes desde una empresa ofertamos servicios de información, estamos en mejor situación? No. En general estamos peor. Toda proporción guardada, carecemos de una capacidad técnica similar. La que sí tenemos, la empleamos en tareas rutinarias; nos falta visión para invertir en investigaciones metodológicas que conduzcan a diseños más eficientes.

Por otro lado, el "cliente" es menos sofisticado, depende casi totalmente de nuestro consejo, y tiene gran dificultad de comunicación para tratar temas metodológicos. Este es un problema y reto nuestro, no del cliente.

El resultado es que la "costumbre" se hace ley. Tamaños de muestra excesivos, con un dispendio innecesario para el cliente, o insuficientes, "vendiendo" precisión y/o confianza no atenibles. Logística de trabajo de campo con riesgos altos de introducir sesgos en los resultados, difícilmente detectables a la luz de los mismos, etcétera.

Un ejemplo a considerar. "Nuestros resultados tienen una confianza del 95 por ciento con una precisión de más o menos el 5 por ciento." Una aseveración común. Acto seguido se leen o escuchan estimaciones que van del orden del cinco al diez por ciento para varias categorías de respuesta. Si uno se apega a la aseveración inicial, debemos aceptar que éstas tienen un error relativo que va del cien al 200 por ciento.

Otra situación común es el cliente "acostumbrado" a pagar cierto precio por estudios basados en un número respetable de observaciones. Por ejemplo, 100 nuevos pesos por observación en una encuesta de tres mil observaciones, siguiendo alguna metodología "popular". Si ahora se le dice que se puede estimar lo que le interesa con la precisión y confianza que su estudio/decisión requiere, por medio de tan sólo mil casos seleccionados con una metodología "no popular" pero más eficiente, y que su costo unitario es ahora de 200 nuevos pesos por observación, se resistirá. Ante obstáculos de comunicación para convencer, o se vuelve a lo usual o se "pierde" al cliente.

La buena noticia es que cada vez tienen más demandas las estimaciones provenientes de encuestas de diversa complejidad o sencillez, por auditorios más amplios y diversos. Ya no es la afición exclusiva del experto o comentarista especializado, o del célebre "tomador de decisiones". En buena hora la "sociedad", al menos una buena parte de las grandes urbes, las ha hecho suyas.

Informemos, sí. Pero aprovechemos el acicate de la crisis para rescatar el valor de la investigación metodológica, que conlleva proponer diseños y estrategias más eficientes y acordes a ésta, evitando duplicidades no necesarias. Cada nuevo peso que "rescatamos" podrá destinarse a la reducción del déficit público, a paliar las severas restricciones de liquidez de nuestros clientes, o al tan necesitado ahorro nacional

Director general de Berumen y Asociados S.C.